**ESCRITOS DE ALEGATOS FINALES EN EL CASO 12.658
(Luis Gonzalo "Richard" Vélez Restrepo y familia v. Colombia)**

Los representantes de las víctimas presentan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "Corte Interamericana") este documento con el propósito de enfatizar —a la luz de las declaraciones, los argumentos y los peritajes vertidos con ocasión de la audiencia pública de 24 de febrero de 2012— algunos aspectos puntuales para la resolución y la emisión de la sentencia en el caso 12.658: Luis Gonzalo "Richard" Vélez Restrepo y familia v. Colombia.

Tal como fuera sostenido en la audiencia pública, la importancia del caso 12.658 radica no sólo en la búsqueda de justicia emprendida por Richard Vélez y su familia desde hace ya cerca de 16 años, sino también por su carácter emblemático en el contexto de convulsión social en el que las violaciones a los derechos humanos de las víctimas se produjeron: un contexto en el que no existía una "prueba reina" del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes miliares en la represión de las multitudinarias marchas campesinas de la época y en el que la difusión de las imágenes dando a conocer tales abusos se pagaba con un altísimo riesgo para la vida y la integridad personal¹.

Tal como afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "CIDH") en su informe de fondo sobre este caso:

[...] en el caso estudiado se presenta un abuso en el uso de la fuerza pública que condujo al sometimiento absoluto del periodista al poder fáctico de miembros del Ejército que lo redujeron violentamente hasta colocarlo en estado de indefensión y, estando en este estado, lo golpearon indiscriminadamente hasta provocarle severas lesiones. Todo lo anterior, con el propósito de impedir que ejerciera su labor periodística y denunciara los abusos en el ejercicio de la fuerza que se estaban presentando².

A lo anterior se suma la importancia regional del caso en vista de los asesinatos, los ataques, las amenazas y los hostigamientos que continúan ocurriendo en nuestro continente por causas relacionadas con el ejercicio de la actividad periodística. Como es conocido, la impunidad y la autocensura generadas por circunstancias como las que presenta el caso 12.658 siguen siendo, lamentablemente, signos distintivos para la libertad de expresión de nuestros días³.

Como ha quedado demostrado en las diferentes etapas procesales ante este tribunal, con posterioridad al brutal ataque sufrido por Richard Vélez el 29 de agosto de 1996, y con ocasión de las denuncias realizadas por este hecho, la familia Vélez Román fue víctima de una campaña de hostigamientos y amenazas orquestada desde el Estado que culminó con el exilio forzoso de sus miembros en represalia por su valentía y persistencia en la búsqueda de justicia por dichos abusos.

¹ Audiencia pública de 24 de febrero de 2012. Presentación inicial del caso 12.658 por la CIDH.

² CIDH. Informe de Fondo en el caso No. 12.658 (Luis Gonzalo "Richard" Vélez y familia (Colombia)), párr. 110.

³ Tampoco debe perderse de vista que, en el presente caso, la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión se vio afectada en tanto lo ocurrido durante y después del ataque en El Caquetá ocasionó un efecto amedrentador y de autocensura sobre quienes denunciaban a agentes militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.

En estos alegatos finales nos centraremos en los aspectos siguientes en torno al fondo del caso, sin perjuicio de reiterar en todos sus extremos lo señalado en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante, "ESAP") ya presentado ante este tribunal:

I. Richard Vélez sufrió un intento de desaparición forzada el 6 de octubre de 1997 que vulneró su derecho a la vida

En esta sección queremos insistir en la importancia de la calificación por parte de este tribunal de los hechos acaecidos el 6 de octubre de 1997 como un "intento de desaparición forzada" en contra de la víctima. En la audiencia pública ante este tribunal, Richard Vélez señaló que dicho suceso no podría configurar un intento de secuestro puesto que, bajo el contexto para entonces vigente en Colombia, ese delito solía ser motivado:

[...] por algo económico o porque [la persona era] políticamente importante. Yo no tenía dinero y políticamente pues no le importaba a nadie. De pronto, yo me convertí en un obstáculo para una investigación contra unos militares y creo que la intención de ellos era llevarme y desaparecerme. Ése era el *modus operandi* que era utilizado contra muchas personas en Colombia: Te llevan, te matan y te desaparecen en otro lado para que no queden evidencias⁴.

A esto debe sumarse el hecho de que para Richard Vélez el *modus operandi* de la desaparición forzada no era una práctica o realidad desconocida. En su condición de periodista de orden público en Colombia con varios años de experiencia, él conocía de casos análogos en los que colegas e individuos habían perecido bajo esa misma modalidad. Tal como señalamos en el ESAP:

[S]i bien lo ocurrido pareciera configurar un acto de secuestro en virtud del resultado, tal calificación no permite captar la verdadera intención de sus perpetradores. [...], en el período 1995-1998, las fuerzas de seguridad del Estado no "secuestraban" a quienes denunciaban a sus miembros por violaciones a los derechos humanos: no se procuraba extorsionar u obtener un pago a título de rescate. Por el contrario, la práctica era más bien que, una vez producida la detención, se procedía a la tortura y al asesinato o desaparición de la víctima. Era así la respuesta última frente a la inobservancia de las "advertencias" anteriores⁵.

Y en efecto, la desaparición forzada era una práctica que se llevaba a cabo durante dicho período en Colombia para silenciar a quienes resultaban incómodos para ciertos sectores de la fuerza pública. En este caso se trataba de los agentes militares señalados por Richard Vélez como responsables del brutal ataque en El Caquetá y de la campaña posterior de amenazas y hostigamientos en su contra y la de su familia.

Para sustentar esta afirmación queremos llamar la atención del tribunal respecto a lo señalado por Ana María Díaz en su peritaje con ocasión de este proceso. En su *afidávit* la perito afirma que entre 1996 y 1997 las desapariciones forzadas "no eran hechos aislados" en Colombia sino que constituían "un patrón de ataques cometidos contra la población civil, por parte de la Fuerza Pública, que [fue] motivo de preocupación para varios organismos

⁴ Declaración testimonial de Richard Vélez en la audiencia pública de 24 de febrero de 2012.

⁵ Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, párr. 53.

internacionales de protección de los derechos humanos”⁶. La experta enfatiza además que tales violaciones se producían “por fuera de combate, es decir en la calle, en la casa o en el lugar de trabajo de las personas”⁷.

Asimismo, al describir las modalidades de acción de las desapariciones forzadas del período en cuestión atribuidas directamente a agentes del Estado, la perito indica que éstas se caracterizaban, entre otros elementos, porque:

- a) La interceptación de las víctimas se producía cuando éstas se dirigían a su lugar de trabajo o transitaban por sus recorridos habituales,
- b) Varias desapariciones se producían a plena luz del día y frente a testigos,
- c) Los perpetradores habían realizado señalamientos públicos a las víctimas antes de su desaparición, y que
- d) Con frecuencia, los perpetradores utilizaban camionetas con vidrios oscuros⁸.

Estas condiciones, como la Corte Interamericana ya conoce en detalle por el expediente de este caso, se verificaron plenamente en lo ocurrido con Richard Vélez el 6 de octubre de 1997.

Es por ello que solicitamos respetuosamente a este tribunal que, tomando en cuenta estos elementos, califique el atentado como un intento de desaparición forzada a fin de otorgar una dimensión fáctica y jurídica precisa de lo ocurrido, en especial con miras a definir—bajo dichas circunstancias—el alcance de las obligaciones internacionales del Estado colombiano para con Richard Vélez en el marco de la protección de su derecho a la vida consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “Convención Americana”).

Desde nuestra presentación inicial ante la CIDH, los representantes de las víctimas hemos insistido en afirmar que en este caso no sólo se configuró una violación del derecho a la integridad personal de Richard Vélez consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, sino que además se vulneraba su derecho a la vida consagrado en el artículo 4 del mismo instrumento debido al intento de desaparición, del cual se escapó de milagro.

No repetiremos lo que ya hemos detallado con amplitud en el ESAP en torno a este extremo⁹. Quisiéramos, sin embargo, llamar la atención a situaciones análogas a las descritas en este caso en las que se han declarado violaciones al derecho a la vida de las víctimas pese a que éstas no perecieron como producto de los ataques que sufrieron. Dicho de otra manera, la vulneración directa del artículo 4 de la Convención Americana—si se le compara con su equivalente en el artículo 2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en adelante, “Convenio Europeo”)—no debe ser solamente afirmada cuando se produce el fallecimiento (o la desaparición) de las víctimas a manos del agentes estatales, sino también como un derecho de aquéllos que han sobrevivido fortuitamente situaciones en las que su vida corrió un gravísimo riesgo.

En el *Amicus Curiae* presentado por la *Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Universitat de València* se sostiene que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene aplicando en

⁶ Declaración jurada (peritaje) de Ana María Días, párr. 3.

⁷ *Ibid*, párr. 1.

⁸ *Ibid*, párr. 2.

⁹ Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, sección 2.1.

su jurisprudencia constante el artículo 2 del Convenio Europeo "a casos en los que se ha puesto letalmente en peligro la vida una persona y ha sobrevivido", dado que "no se requiere que se haya producido la muerte de la víctima para entender vulnerado su derecho a la vida"¹⁰.

Dicho documento pone especial atención en el análisis de tres decisiones recientes del tribunal de Estrasburgo (*Makaratzis c. Grecia* (20 de diciembre de 2004), *Acar y otros c. Turquía* (24 de mayo de 2005) e *Ismail Altun c. Turquía* (21 de septiembre de 2011)), para afirmar que, para el sistema europeo de protección de los derechos humanos "parece claro que la muerte de la víctima que sufre el ataque no es un requisito indispensable para entrar a valorar el que se haya vulnerado el derecho a la vida recogido en el Art. 2 del CEDH"¹¹.

De acuerdo con los integrantes de la *Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Universitat de València*, "lo que el [Tr]ibunal [Europeo] valora en este tipo de casos es el hecho de que la fuerza ejercida haya sido **potencialmente letal** contra la víctima y [el] tipo de impacto [que] tuvo esta fuerza no sólo en la integridad física de la víctima, sino también en el interés que el derecho a la vida trata de proteger". Todo ello para afirmar además que resulta irrelevante la intención de los agresores, puesto que lo fundamental para este tipo de análisis es la naturaleza de las conductas a la que son sometidas las víctimas que "p[one] en riesgo sus vidas aunque sobrevivan"¹².

Y en efecto, no resulta lógico afirmar que un Estado, verificadas estas circunstancias, pueda eximirse de su responsabilidad internacional respecto de un individuo cuando ha puesto en peligro la vida de éste a un punto tal que es sólo la fortuna la que ha permitido que sobreviva. Cabe señalar además que la propia Corte Interamericana ya ha sostenido este mismo razonamiento en su sentencia para el caso de la *Masacre de la Rochela*¹³.

En el caso de Richard Vélez, no fue la diligencia debida del Estado la que salvó su vida, pues ésta se distingue por su ausencia casi total frente a la larga campaña de amenazas y hostigamientos que sufrió. Después del intento de desaparición forzada en su contra, lo único que el Estado atinó a formular fue la entrega de un chaleco antibalas. De hecho, ante tan precaria medida de protección, Richard Vélez y su familia no tuvieron otra salida que asilarse en otro país y para someterse a las vicisitudes y externalidades propias del exilio forzado.

Por lo tanto, el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana fue doblemente violado en este caso, dado que el Estado colombiano incumplió tanto la obligación positiva del art. 4 como la negativa. Como ya vimos, los Estados pueden ser declarados responsables directos no sólo cuando sus agentes acaban arbitrariamente con la vida de las personas, sino cuando las víctimas sobreviven el atentado potencialmente letal de forma fortuita. De igual manera, el Estado es responsable internacionalmente cuando incumple la obligación positiva de garantizar el derecho a la vida de los individuos bajo su jurisdicción, sobre todo cuando estos se encuentran en una especial situación de riesgo o peligro generado por agentes estatales, tal como era el caso de Richard Vélez.

¹⁰ Amicus Curiae de la Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Universitat de València, p. 9.

¹¹ Ibid, p. 11.

¹² Ibid, p. 12.

¹³ Corte I.D.H. Caso de la Masacre de la Rochela v. Colombia. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párrs. 126-127.

De último, y sobre este mismo punto, no queremos dejar pasar la oportunidad para manifestar nuestra preocupación, a la luz del reconocimiento parcial de responsabilidad realizado por el Estado, por algunas de las afirmaciones contenidas en la declaración de Néstor Mejía Ramírez. En su testimonio, Néstor Mejía Ramírez sostiene que el ataque en El Caquetá contra Richard Vélez no tuvo “consecuencias graves” y que éste habría sido consecuencia del estrés que experimentaron los soldados¹⁴ y de la “propia imprudencia” de la víctima¹⁵.

Preocupa que el Estado presente este testimonio luego de su reconocimiento parcial de responsabilidad, dado que afirmaciones como éstas lo único que parecen mostrar es una intención maliciosa de reducir la real dimensión de los hechos, buscando convertir este gravísimo suceso y la sucesiva campaña de amenazas y hostigamientos contra la familia Vélez Román en asuntos de menor importancia que no involucraban directamente a los agentes estatales.

II. El Estado colombiano es responsable por la campaña de amenazas y hostigamientos iniciada luego del 29 de agosto de 1996 contra Richard Vélez y su familia

Uno de los principales puntos de discusión tratados durante la audiencia pública fue el de la atribución de responsabilidad al Estado por los hechos ocurridos con posterioridad al ataque en El Caquetá. La posición del Estado colombiano frente a este alegato ha consistido en negar que la campaña de amenazas y hostigamientos haya existido o que sus agentes hayan estado detrás de los hechos que culminaron en el exilio de la familia Vélez Román en los Estados Unidos.

A lo largo de este proceso los representantes de las víctimas hemos presentado diferentes elementos de prueba destinados a desvirtuar la posición estatal en cuanto a la no ocurrencia de estos actos, *inter alia*: Las declaraciones de un compañero de trabajo de Richard Vélez, una carta dirigida a la Procuraduría General de la Nación por parte del empleador de Richard Vélez, una copia de una amenaza escrita, documentos del Estado certificando la aprobación de medidas de protección para la familia Vélez Román y una resolución de la Procuraduría que registra como hecho el hostigamiento por parte de personas armadas que llegaron a la residencia de la familia Vélez Román el 24 de septiembre de 1997¹⁶. A esto deben sumarse los testimonios de los miembros de la familia Vélez Román que relataron en detalle estos mismos episodios durante la audiencia pública.

Pero existen también otros elementos probatorios que nos permiten afirmar que esta campaña de amenazas y hostigamientos tuvo un clarísimo nexo con el ataque sufrido por Richard Vélez en El Caquetá el 29 de agosto de 1996 y con las acciones posteriores iniciadas para impulsar las investigaciones en torno a dicha agresión. En este extremo resulta de vital importancia recordar que fue la propia Procuraduría General de la Nación la que consideró que las amenazas contra Richard Vélez y su familia estaban motivadas con su ejercicio profesional y que “quienes más pudieron haber tenido interés en hostigar y amenazar al señor Vélez y a su familia, serían las personas que lo agredieron en los hechos violentos

¹⁴ Declaración jurada (testimonio) de Néstor Ramírez, respuesta a la pregunta 4.

¹⁵ *Ibid.*, respuestas a las preguntas 7 y 14.

¹⁶ CIDH. Informe de Fondo en el caso No. 12.658 (Luis Gonzalo “Richard” Vélez y familia (Colombia)), párr. 89.

ocurridos en el municipio de Morelia-Caquetá, el 29 de agosto de 1996¹⁷. Esta conclusión no sólo es razonable sino que del propio expediente nunca se ha desprendido una hipótesis alternativa.

Nuestra línea de argumentación se encuentra respaldada además en la declaración de Francisco Tulande, perito propuesto por el Estado que expuso sus hallazgos durante la audiencia pública de 24 de febrero de 2012. En su declaración pericial, el experto indicó que no era excepcional que para la época de los hechos las fuerzas militares colombianas se opusieran a las investigaciones en contra de sus miembros, siendo común que en algunos casos se realizaran acciones amedrentadoras dirigidas a silenciar a los denunciantes.

Así, respecto del caso de Maribel Osorio, periodista que facilitó que la cinta grabada por Richard Vélez fuera difundida, el perito del Estado afirmó que:

[...] ella también recibió amenazas, unas amenazas que apuntaban a reprocharle su actitud de solidaridad de colegaje [sic]. [E]lla asume que [las amenazas] provenían de los soldados que protagonizaron la agresión contra el periodista [Richard] Vélez¹⁸.

Posteriormente, el experto afirmó que, durante la época de los hechos del Caquetá:

Muchos periodistas amenazados no denunciaban estos actos [de amenaza] por dos razones. Primero, por el riesgo que traía una amenaza de esas características, sobre todo un riesgo para la familia. No se denunciaba por el temor a perder la familia. Segundo, porque había mucho escepticismo [que] frente al volumen de las denuncias ante las autoridades se p[udiera] caer en el riesgo de la impunidad. [...] Era una coyuntura que escapaba a cualquier control¹⁹.

En el mismo sentido, en el peritaje rendido por *afidávit* ante la Corte Interamericana, Daniel Coronell ha señalado que:

A raíz de esta denuncia pública, y también de las acciones legales emprendidas por el señor Vélez para que le fueran respetados sus derechos y restituidos los daños causados; él y su familia empezaron a ser víctimas de actos de intimidación, amenaza y agresión que lo obligaron a dejar el país, truncando así su carrera y causando un desplazamiento forzado de todo su núcleo familiar.

[...]

Tristemente para el periodismo y para la nación, sus justas quejas no solamente no fueron atendidas sino que derivaron en amenazas que hicieron insostenible su situación en Colombia y lo obligaron a dejar el trabajo y el país junto con su familia²⁰.

¹⁷ Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, Unidad de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, Informe Evaluativo sobre Indagación Preliminar D.H.I.E., 125/98, 10 de julio de 1998; Procuraduría General de la Nación, Veeduría, Auto archivo definido, Radicación No. 030-54410/2001, 3 de mayo de 2002. Ambos documentos se encuentran en el expediente del caso ante la Corte Interamericana.

¹⁸ Declaración jurada (peritaje) de Francisco Tulande en la audiencia pública de 24 de febrero de 2012.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Declaración Jurada (peritaje) de Daniel Coronell, pp. 2-3.

Estas consideraciones nos permiten responder además las cuestiones planteadas por los jueces Ventura Robles y May Macauley durante la audiencia pública en cuanto a si existía alguna hipótesis alternativa o, dada la aceptación del Estado en cuanto a que sus investigaciones para esclarecer estos hechos resultaron claramente insuficientes, cómo se podía sostener que sus agentes no estuvieran involucrados en tales hechos.

Hemos preparado un anexo (Anexo A: Línea de tiempo) con el detalle de las agresiones y amenazas sufridas por las víctimas del caso en función a las denuncias y actuaciones procesales ocurridas en el caso. Creemos que será una herramienta de gran utilidad al momento de considerar la naturaleza unitaria de los hechos que llevaron al exilio a la familia Vélez Román. Asimismo, permite establecer claramente cómo ante una denuncia o actuación procesal en el caso, la campaña de amenazas y hostigamientos por parte de los agentes militares se reactivaba.

Todo lo anterior se condice además con el motivo por el cual se concedió el asilo a Richard Vélez y a su familia. En efecto, el gobierno de los Estados Unidos asiló a los miembros de la familia Vélez Román bajo la causal de persecución política²¹.

En consecuencia, y dados los elementos probatorios mostrados a lo largo del proceso ante este tribunal, solicitamos que la Corte Interamericana declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la campaña de amenazas y hostigamientos sufrida por los miembros de la familia Vélez Román, la misma que tuvo directa conexión con el ataque del 29 de agosto de 1996 y las acciones posteriores iniciadas por Richard Vélez y Sara Román para obtener justicia en su caso.

III. Los actos de agresión y la campaña de amenazas y hostigamientos en contra de Richard Vélez y su familia configuraron tortura

Por otra parte, durante la audiencia pública de 24 de febrero de 2012, los representantes de las víctimas reiteramos nuestra posición en cuanto a que los actos de agresión contra Richard Vélez, así como la campaña de amenazas y hostigamientos en su contra y la de su familia configuraron un claro supuesto de tortura.

En este escrito queremos poner de manifiesto que cuando el Estado descalifica lo ocurrido en el caso como una “grave” violación a los derechos humanos de las víctimas, lo que revela en realidad es una estrategia para evitar cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar los hechos materia del caso, alegando que tales delitos ya han prescrito en el fuero interno. Muy al margen de las consideraciones que puedan realizarse respecto a la pertinencia de dicho alegato—nos remitimos y adherimos a las consideraciones de la CIDH en su informe de fondo sobre este punto—, queremos reafirmar que este tribunal no debe dejar pasar por alto el hecho de que lo ocurrido desde el 29 de agosto de 1996 hasta el 12 de septiembre de 1998 configuró una campaña orquestada por agentes estatales, desarrollada en diferentes fases, pero siempre con un mismo objetivo: Silenciar a Richard Vélez por haber dado a conocer el contenido de la cinta de video que grabó en El Caquetá y

²¹ Esta afirmación responde la pregunta formulada por el juez Vio Grossi durante la audiencia pública de 24 de febrero de 2012. Ver además el anexo 42 del Informe de Fondo presentado por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12.658: Carta de 30 de julio de 1998 de Patricia A. Trubiano, Directora de la Oficina de Asilo, Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos a Luis Gonzalo Vélez Restrepo.

por haber responsabilizado a miembros de las fuerzas militares como responsables de las agresiones, amenazas y hostigamientos en su contra y la de su familia.

De acuerdo con la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana en torno al artículo 5 de la Convención Americana, la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad. Como hemos señalado en diferentes escritos ante la Corte Interamericana, lo ocurrido con Richard Vélez el 29 de agosto de 1996 debe entenderse como un acto de tortura dado que sus elementos constitutivos (acto intencional que le causó severos sufrimientos físicos y mentales que se cometió con determinado fin o propósito) firmemente establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se han verificado claramente²².

Asimismo, como afirmamos durante la audiencia pública, las posteriores amenazas e intimidaciones sufridas por la familia Vélez Román, y que culminaron con su exilio forzoso en los Estados Unidos, no deben ser vistas como violaciones desconectadas de la tortura sufrida por Richard Vélez en el Caquetá. Todo lo contrario, tales acontecimientos—adecuadamente valorados por la CIDH como atribuibles al Estado—fueron consecuencia directa de la difusión de las imágenes de video y las posteriores denuncias interpuestas por la familia Vélez Román en su búsqueda de justicia por lo ocurrido.

Las amenazas y los hostigamientos que acarrearón el ataque del 29 de agosto de 1996 fueron actos deliberados que tuvieron como finalidad intimidar y silenciar a los miembros de la familia Vélez Román. Cumplieron así el propósito de causarles a Richard Vélez, Sara Román, y Mateo Vélez una angustia profunda y zozobra permanente, lo que produjo a su vez un daño psicológico severo que ha permanecido con ellos—incluyendo a Juliana Vélez—aún en el exilio. Por ello, dichas agresiones deben ser apreciadas como parte de un único hilo conductor que no puede desagregarse o disociarse de la tortura inicial contra Richard Vélez en el Caquetá—como pretende el Estado—a fin de limitar indebidamente la competencia de este tribunal y su responsabilidad internacional.

En efecto, no pueden verse estos hechos de manera aislada tomando en cuenta además los valiosos testimonios de Richard Vélez y Sara Román recogidos durante la audiencia, y la falta de respuesta coherente por parte de la representación del Estado cuando fuera cuestionada por los magistrados en cuanto a la posible autoría alternativa de estos hechos fuera de los agentes militares. Hacerlo sería, entonces, desatar los nexos causales que van poniendo de manifiesto cómo a medida que Richard Vélez y Sara Román realizan alguna denuncia o participaban de alguna diligencia indagatoria ante las autoridades, las amenazas reaparecían o lo que es peor, se recrudecían.

Ahora bien, queremos en este escrito, y a la luz del peritaje de la doctora Carol Kessler, poner de manifiesto la dimensión del daño psicológico que esta campaña produjo y sigue produciendo en cada miembro de la familia Vélez Román. En su detallado peritaje, la doctora Kessler afirma que:

²² Escrito de los representantes de las víctimas ante la Corte Interamericana de 25 de noviembre de 2011, párrs. 3-7; Corte IDH. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 79.

Si bien hoy ellos viven bajo una situación de asilo político, la familia Vélez Román continúa impactada por la violencia sufrida en Colombia y por el exilio. Los problemas de salud mental de los padres (Richard y Sara) impactan a sus hijos (Mateo, Juliana y Sofía). Richard y Sara se encuentran en una búsqueda de seguridad y justicia así como del significado de su desarraigo de su país natal y amado. Por miedo a morir, Richard, y después su familia, fueron forzados a mudarse a un país ajeno –en el que no conocían ni el idioma– desde un lugar en el que eran plenamente “capaces” de vivir. Perdieron sus lazos con su familia extendida, sus amistades, su red social, su empleo, así como su sentido de estabilidad y de seguridad.

La familia Vélez Román vive con presiones externas producto de la inestabilidad económica y de los procesos legales complejos en los que son partes, siendo víctimas del aislamiento y de las presiones interiores de un estado de incertidumbre. Tienen la preocupación de haber dejado atrás a su familia mezclada con un deseo y temor de regresar a Colombia. Cada uno carga con recuerdos imborrables de la violencia. Cada uno de los miembros de la familia Vélez Román muestra los efectos psicológicos y neurofisiológicos crónicos que sufre la mayoría de los refugiados, de acuerdo con la literatura reciente sobre el tema²³.

La doctora Kessler ha diagnosticado además que los hechos violentos—físicos y psicológicos—han generado en los miembros de la familia Vélez Román secuelas permanentes tales como: (1) trastorno crónico por estrés postraumático, (2) depresión mayor, recurrente, con síntomas severos, sin elementos psicóticos, (3) trastorno crónico por estrés postraumático con síntomas de aparición tardía, (4) depresión mayor, recurrente y con síntomas moderados y (5) Distimia. ¿Cuál es el origen de estas afectaciones en la salud mental de los miembros de la familia Vélez Román? La respuesta es una sola: Las vulneraciones sufridas con ocasión de presenciar el ataque en El Caquetá y la posterior campaña de amenazas y hostigamientos que los llevó al exilio²⁴.

Complementando este punto, tampoco debe perderse de vista la definición que propone la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y la tortura en su artículo 2: “Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

En el presente caso, el peritaje y los propios testimonios de las víctimas muestran claramente cómo existió una campaña orquestada por agentes militares de manera intencional con el objetivo de causar un sufrimiento físico y luego mental a los miembros de la familia Vélez Román y el de intimidar a los mismos para silenciar sus denuncias. Es decir, se cumplen los supuestos que la definición anterior y la propia jurisprudencia de este tribunal proponen. Y tal como ha quedado señalado en el acápite anterior, esta campaña provino de agentes estatales. No existe ni se investigó hipótesis alternativa en el fuero

²³ Declaración jurada (peritaje) de Carol Kessler, párrs. 3 y 4.

²⁴ Ibid, párrs. 7-9, 10-13, 21-28, 31, 38-43, 48-51, 53, 57, 60-63, 71-73.

interno y el Estado tampoco ha sabido articular una línea de atribución de responsabilidad distinta.

Es por estas razones que consideramos que al momento de emitir su sentencia, la Corte Interamericana debe tomar en cuenta que los hechos ocurridos en El Caquetá y la posterior campaña de amenazas y hostigamientos en contra de Richard Vélez y su familia, vistos como un plan trazado con un solo objetivo, configuran un clarísimo caso de tortura, y por ende, de una grave violación de la Convención Americana cuya naturaleza no admite prescripción alguna.

IV. El Estado colombiano es responsable por la violación de los artículos 17 y 19 de la Convención Americana en perjuicio de Richard Vélez y su familia

Finalmente, los representantes de las víctimas quisiéramos poner de presente la importancia de que este tribunal declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la vulneración de los derechos a la familia y de la niñez consagrados en los artículos 17 y 19 de la Convención Americana.

Ahora bien, en esta sección llamamos la atención del tribunal respecto a lo afirmado en el *Amicus Curiae* presentado por el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario en cuanto al impacto de la campaña de agresiones y hostigamientos en la estabilidad financiera de la familia Vélez Román:

[E]l ejercicio de la libertad de expresión para el señor Vélez constituía, además de un derecho ciudadano, un medio de subsistencia por su trabajo como periodista, [...] al verse obligado a renunciar al ejercicio de este derecho por causa de las amenazas e intimidaciones de que fue objeto tuvo que abandonar también la fuente de sostenimiento económico para su familia²⁵.

Lo anterior también guarda una estrecha relación con lo afirmado por la doctora Carol Kessler en su peritaje en cuanto al daño psicológico experimentado por Richard Vélez producto de dichos ataques:

Desde que experimentó el ataque y las amenazas siguientes que culminaron en el exilio, el señor Vélez se ha sentido deprimido casi todos los días. No le interesa lo que tiene a su alcance. Se deprime al haber perdido su carrera como periodista y sus nexos comunitarios, ya que en Colombia era muy activo en el desarrollo de programas culturales. No puede concentrarse cuando intenta aprender el inglés. Se siente inútil y le da vergüenza depender de sus hijos para entender dicho idioma. Se siente mal de sí mismo por no encontrar trabajo fijo, y por haber tenido que trabajar como empleado de limpieza y como guía de turismo²⁶.

En efecto, como es conocido por este tribunal, luego del ataque en El Caquetá, Richard Vélez tuvo que dejar su trabajo para poder proteger su vida y la de los miembros su familia, todo lo cual afectó dramáticamente la estabilidad financiera de sus integrantes. Asimismo, para el caso particular de la familia Vélez Román:

²⁵ *Amicus Curiae* presentado por el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, p. 10.

²⁶ Declaración jurada (peritaje) de Carol Kessler, párr. 13.

La ruptura de la unidad familiar por una causa ajena a la voluntad de los miembros de la familia, (tal y como son las amenazas de muerte o los actos de violencia perpetrados contra alguno de ellos y que llevan a esa persona a abandonar a su familia con el objetivo de salvar su vida), constituye un evento traumático por cuanto implica la destrucción de las rutinas familiares, la desaparición física de una persona que normalmente hacía parte del mismo y, en general, un cambio en la vida familiar²⁷.

[...]

Esto llevó a que la estabilidad emocional de los miembros de la familia se viera gravemente afectada, si se tiene en cuenta además la ausencia del padre y esposo que había escapado a un país que le era desconocido. La imposibilidad de comunicar su caso con tranquilidad a las autoridades y las consecuentes situaciones de tensión y estrés que se hubieran producido con ocasión de esto, son una muestra más de cómo la situación del señor Richard Vélez puede verse también como una vulneración de los derechos de los miembros de su entorno familiar²⁸.

Esto nos lleva al otro punto que deseamos resaltar, el cual revela cómo estos hechos guardaron una especial vinculación con las vulneraciones a los derechos de Mateo y Juliana Román. Sobre este punto, el *Amicus Curiae* del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario sostiene que “no se tuvieron en cuenta las necesidades de los menores Vélez Román [...] y se descuidó la garantía de la cual son titulares los menores debido a que se les impidió un desarrollo integral y sano de su personalidad con el hecho de que se vieron obligados a dejar sus estudios y cambiar de hogar”²⁹.

Es evidente además que el impacto de lo ocurrido con Richard Vélez en El Caquetá tuvo gravísimas consecuencias para la vida familiar y la integridad psíquica de los menores Mateo y Juliana Vélez. Como detalla el peritaje de Carol Kessler:

Mateo recuerda además que llegó un momento en que ni su casa era segura. Él recuerda que su madre tenía miedo constantemente –miedo de los mensajes que llegaban por el correo y miedo de quien tocara a la puerta. Mateo recuerda con detalle el día en que su padre salió para el trabajo para regresar gritando por ayuda después de haber sido casi desaparecido. Este momento en particular marcó un cambio dramático, ya que, a partir del mismo, Mateo y su familia tuvieron que huir de su hogar, yendo de casa en casa en busca de refugio.

Mateo también recuerda que poco después tuvo que ser separado de su padre cuando éste partió a Nueva York, y que producto de la mudanza a Medellín fue separado también de su madre. Su madre y hermana vivían con su abuela materna, mientras que él se quedaba con su abuela y tía paternas que domiciliaban cerca de su nueva escuela. Mateo mencionó en la entrevista que después de un tiempo el pedía a sus familiares la foto de su padre pues había olvidado su imagen. Mateo no entendía por qué su padre tenía que irse tan lejos. Él recuerda que su madre le decía que su padre quería estar con ellos pero que no podía. Trataba de estar fuerte para

²⁷ *Amicus Curiae* presentado por el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, p. 14.

²⁸ *Ibid.*, p. 15.

²⁹ *Ibid.*, p. 19.

no preocupar más a su madre, aunque le dolía profundamente cada domingo cuando tenía que despedirse de ella después de su reunión de fin de semana para volver a casa de su abuela y a la escuela.

[...] Todos ellos son eventos en los que Mateo se sintió impotente y con la amenaza de que él o su familia pudieran ser heridos o asesinados. Estudios muestran que traumas de esta naturaleza impactan al niño en su neurofisiología, su comportamiento y su manera de percibir su entorno. Además, traumas de este tipo pueden impactar no sólo el momento mismo, sino que pueden continuar manifestándose por años³⁰.

[...]

El desarrollo de Juliana dentro de una familia con padres en el exilio le ha creado un ambiente de inseguridad. La literatura reciente sobre el tema destaca que los traumas se transmiten entre las generaciones. Los traumas y pérdidas que sufrieron sus padres, y que ella vivió cuando era muy pequeña, han marcado la manera cómo Juliana percibe el mundo (como un lugar nada confiable), y le han generado una precoz necesidad de tomar responsabilidades por sí misma. Aunque Juliana no tiene recuerdos verbales de sus primeros tres años de vida en Colombia, su desarrollo neurofisiológico se produjo en un ambiente de trauma e inseguridad que la ha hecho vulnerable a la depresión que ahora experimenta.

En particular, Juliana nota que vive rodeada de las pérdidas producto del exilio. Cuando Juliana viajó a su tierra natal por primera vez durante su adolescencia, se dio cuenta de las relaciones cercanas entre sus abuelos, tíos y primos: ella percibió cuánto había perdido en relación con sus lazos familiares³¹.

Es así que, de los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1996, “se derivaron afectaciones a la calidad y condiciones de vida de su familia, entre ellos sus hijos menores, quienes fueron víctimas de amenazas y hostigamientos, se vieron obligados a cambiar de residencia, a vivir una difícil situación económica, a cambiar drásticamente sus condiciones habituales de vida, al desarraigo de su comunidad, a sufrir consecuencias psicológicas, la pérdida de la figura esencial del padre y a tener que guardar sus opiniones frente a todo lo ocurrido”³².

Es por ello que solicitamos respetuosamente a la Corte Interamericana que declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los derechos a la familia y de la niñez consagrados en el artículo 17 de la Convención Americana en perjuicio de Richard Vélez, Sara Román, Mateo y Juliana Vélez, y en el artículo 19 del mismo instrumento en perjuicio de Mateo y Juliana Vélez.

V. Conclusión

Queremos concluir este escrito de alegatos finales reiterando nuestro petitorio del ESAP. En dicho documento señalamos que:

³⁰ Declaración jurada (peritaje) de Carol Kessler, párrs. 40-42.

³¹ *Ibid.*, párrs. 57-58.

³² Amicus Curiae presentado por el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, p. 20.

El Estado deberá [...] reparar a Luis Gonzalo "Richard" Vélez Restrepo por la violación de sus derechos contenidos en los artículos 4, 5, 11.1 y 13, 17, 22.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento. De igual manera, deberán repararse las violaciones en perjuicio de Aracelly "Sara" Román Amariles, Mateo Vélez Román, y Juliana Vélez Román de los artículos 5, 17, 22.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo tratado. Respecto de Mateo y Juliana Vélez Román, también se deben reparar las violaciones al artículo 19 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de dicho instrumento³³.

Al respecto, queremos destacar la importancia de insistir en el cumplimiento de la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones detalladas en este proceso, así como en el estricto cumplimiento de las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición solicitadas por la familia Vélez Román en dicho documento.

Asimismo, reiteramos los términos de la solicitud de indemnizaciones debidas como consecuencia de los extensos daños materiales y morales ocasionados. Sin embargo, queremos indicar que, a la luz de lo expresado por Richard Vélez en la audiencia pública de 24 de febrero de 2012 respecto a la naturaleza de sus lesiones producto de la agresión en El Caquetá, el monto por concepto de daño moral deberá reducirse a US\$ 140,000.00 (Ciento cuarenta mil con 00/100 dólares americanos)³⁴.

Finalmente, agregamos a lo expresado en el ESAP por concepto de costas y gastos la solicitud de que la Corte ordene en equidad el pago de US\$ 10,000 como reconocimiento del trabajo realizado por el Representante y su equipo ante el Sistema Interamericano y de otros gastos incurridos en el transcurso del litigio.

Washington D.C., 26 de marzo de 2012.

³³ Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, párr. 147.

³⁴ *Ibid.*, sección 4.4.2.1.